

28 de abril, un homenaje a las víctimas del Covid-19 y a la labor de los trabajadores/as de los servicios esenciales

Comisiones Obreras de Aragón y la Unión General de Trabajadores de Aragón han elaborado un manifiesto en el que afirman que este 28 de abril no puede ser como el de otros años, pues nos enfrentamos a una crisis mundial, como no se recordaba desde hace más de un siglo, que ha llevado a los sistemas sanitarios más allá de sus límites, ha paralizado gran parte de la actividad económica y, lo que es más grave y doloroso, se ha llevado decenas de miles de vidas solo en España.

Por eso, el recuerdo este 28 de abril es para esas víctimas, para sus familiares, y amigos y compañeros y compañeras de trabajo, pero también para las personas trabajadoras, que aún a riesgo de su salud, han dado la batalla a esta enfermedad en primera línea.

Son los trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales como, por ejemplo: sanitarios, transportistas, trabajadores del campo, dependientes, trabajadores y trabajadoras de la limpieza, cuidadores y cuidadoras, personal de los cuerpos del orden y seguridad del Estado. Todos ellos, han demostrado la importancia de la clase trabajadora para garantizar el funcionamiento de nuestra sociedad.

La organización considera que la pandemia ha puesto de manifiesto una realidad: la salud laboral es indisociable de la salud pública. De hecho, los contagios en el ámbito laboral y en los desplazamientos vinculados han sido importantes vectores de propagación del virus.

Han quedado en evidencia, las políticas que pretenden priorizar los beneficios empresariales sobre otros derechos prioritarios como es son la salud y el trabajo, en unas condiciones dignas. Así, las políticas de austeridad impuestas para abordar la crisis de 2008 arrasaron los derechos sociales y laborales. Fruto de estos recortes se diezmaron los servicios públicos, que ahora se revelan imprescindibles, como la sanidad pública. También se redujeron las inversiones en prevención de riesgos laborales en las empresas y de financiación de políticas públicas activas en materia preventiva.

La consecuencia fue clara: peores condiciones de trabajo, mayor precariedad laboral, y un repunte, en la última década de los accidentes de trabajo, y de las enfermedades profesionales, aunque sigue existiendo una infradeclaración de las mismas.

Según datos del Gobierno de Aragón, en los dos primeros meses de 2020 hubo 3.206 accidentes laborales, de los cuales 2.753 sucedieron en jornada de trabajo y 354 fueron accidentes in itinere. Por sectores, el sector de industria es el más perjudicado con un incremento de casi 14% con respecto al mismo periodo, produciéndose 839 siniestros

laborales en jornada, seguido de servicios (sube un 12,21%), construcción (5%) y agrario (4,92%). La siniestralidad sube en los dos primeros meses un 11,41% en jornada, y baja en los accidentes in itinere en un 5,82%. En cuanto a las enfermedades profesionales, los datos reflejan un descenso en el registro de las mismas, disminuyendo en un 14,66%

La prevención es un derecho, no un negocio

En el manifiesto, la organizaciones sindicales destacan que, desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hace 25 años, se ha desvirtuado la prevención y, en muchos casos, se ha contemplado como un negocio, no como un derecho, al externalizarse su gestión. Además, se han evidenciado también los vacíos institucionales y la escasa actuación pública para regular mínimamente “el mercado de la prevención” y acabar con su mercantilización.

Así, aunque los servicios de prevención, son indispensables para la organización de las actividades preventivas en las empresas, en muchos casos, han mostrado limitaciones para minimizar las exposiciones al virus. El papel de los servicios de prevención ajenos ha sido escandaloso, ya que no han desarrollado, ni antes, ni por supuesto ahora, una verdadera prevención en las empresas, sino que se han limitado a tramitar la documentación requerida con el fin de cumplir, a efectos meramente formales, con la normativa.

Algunas demandas:

UGT Aragón y CCOO Aragón consideran que para lograr la plena integración de la salud laboral en la salud pública es precisa una mayor coordinación entre los departamentos de sanidad y de trabajo del Gobierno de Aragón . Tanto el ISSLA como Salud Publica y la propia Inspección de Trabajo ,adolecen de limitación de recursos .

Además, la escasez de inspectores de trabajo, España tiene una de las ratios más baja de Europa, ha dificultado sobremanera la atención a las denuncias que personas trabajadoras y sindicatos hemos presentado.

A esto se añade otro obstáculo: el criterio seguido por el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ha renunciado a paralizar actividades por riesgo grave e inminente de contagio ante el coronavirus o a proponer sanciones en una mayoría de situaciones.

Pese a todas estas barreras ambos sindicatos seguirán trabajando para afrontar esta crisis sanitaria y continuarán denunciando donde sea preciso y exigiendo el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. En este sentido, ponen en valor la acción de los miles de delegados y delegadas de prevención y los comités de seguridad y salud.

Por último, señalan que tras el Covid-19 la salud y la seguridad de las personas trabajadoras debe convertirse en un eje central en las relaciones laborales y en las políticas económicas. Para ello, es necesaria la capacidad de movilización del conjunto de los trabajadores y



trabajadoras. No podemos consentir que el sistema económico se contraponga a lo importante, que es la salud y la vida de las personas trabajadoras.

La epidemia de COVID-19 revela la debilidad de la prevención de riesgos laborales en España, la escasez de recursos en las administraciones ,la falta de inversión en Prevención en las empresas que anteponen en muchos casos el beneficio a la salud de las personas trabajadoras, las limitaciones o la inacción de los servicios de prevención ,la falta de integración de la salud laboral en la salud pública ,la falta de coordinación entre administraciones ,la escasez de recursos humanos o la falta de apoyo a nuestras denuncias por parte de Inspección de trabajo.

. CCOO Aragón y UGT Aragón reclaman más recursos para el ISSLA y una mayor inversión en la prevención en las empresas aragonesas. Los sindicatos reclama mayor coordinación entre las administraciones, integrar la salud laboral en la pública y mayor control en las empresas que no cumplen la normativa.

Mas información

Jose de las Morenas. Secretario de Política Industrial y Salud Laboral de UGT Aragón

606104171

Luis Clarimon .Secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Aragón.

669886247